LA INDEROGABILIDAD DE LOS TRIBUNALES VENEZOLANOS EN MATERIA DE TRANSPORTE MARÍTIMO

Venezuela es un país costero, motivo por el cual ha desarrollado una legislación con el objeto de regular las relaciones jurídicas mercantiles que se originan en el comercio marítimo y en la navegación por agua a través de la Ley de Comercio Marítimo.

A este respecto, los contratos marítimos celebrados entre dos o más partes entran dentro de las materias objeto de esta ley, por lo que también los contratos marítimos de transporte de mercancías se encuentran amparados por el prenombrado cuerpo normativo.

Aun así, no es extraño que este tipo de operaciones lleguen a generar conflicto entre diferentes jurisdicciones cuando se trata de transporte marítimo internacional, debiendo ser solucionadas dichas controversias de conformidad al ordenamiento legal. Sobre este punto, el artículo 10 de la Ley de Comercio Marítimo tipifica la **inderogabilidad** de la jurisdicción venezolana en los casos de transporte de bienes o personas por mar que ingresen al territorio venezolano; razón por la cual, en principio, pareciera que el Estado venezolano no podría derogar su potestad de administrar justicia a través de sus órganos jurisdiccionales (ni siquiera por convenio entre las partes).

“Artículo 10. Corresponde a la jurisdicción

venezolana conocer en forma inderogable de las acciones en materia de contratos de transporte de bienes o de personas que ingresan al territorio venezolano.”
(Subrayados nuestros).

A pesar de lo anterior, usualmente la Ley de Derecho Internacional Privado es la encargada de establecer, de forma general, los criterios atributivos de jurisdicción de los tribunales venezolanos. Siendo este el caso, el artículo 47 de la referida Ley de Derecho Internacional Privado, tipifica:

“Artículo 47. La jurisdicción que corresponde a los tribunales venezolanos, según las disposiciones anteriores, no podrá ser derogada convencionalmente en favor de tribunales extranjeros, o de árbitros que resuelvan en el extranjero, en aquellos casos en que el asunto se refiera a controversias relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la República, o se trate de materias respecto de las cuales no cabe transacción o que afecten los principios esenciales del orden público venezolano.”
(Subrayados nuestros).

De la anterior lectura pareciera entenderse que sólo será inderogable la jurisdicción venezolana cuando:

- (i) El asunto se refiera a controversias relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles situados en Venezuela.
- (ii) El asunto se trate de materias respecto de las cuales no cabe transacción.

(iii) El asunto afecte los principios esenciales del orden público venezolano.

A la luz de lo anterior, la inderogabilidad del artículo 47 de la Ley de Derecho Internacional Privado no resulta cónsona a la inderogabilidad de los tribunales venezolanos establecida en el artículo 10 de la Ley de Comercio Marítimo, en el entendido que el transporte marítimo de bienes o personas que entren al territorio no encuadra dentro de ninguno de los tres supuestos señalados de forma precedente.

Sin embargo, en atención a la especialidad de la materia marítima, sería lógico entender que para el caso de transporte por agua deberá prevalecer el imperativo normativo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Comercio Marítimo sobre el artículo 47 de la Ley de Derecho Internacional Privado (por encontrarnos ante un supuesto especial en el sistema interno venezolano). Por lo tanto, los contratos de transporte de bienes o personas que *ingresen* al territorio por mar deberán ser tratados única y exclusivamente por los tribunales venezolanos en razón a la inderogabilidad especial; y en este sentido, por argumentación en contrario, será posible la derogatoria de la jurisdicción venezolana cuando las mercancías o las personas tengan como destino un puerto extranjero y no uno venezolano.

La jurisdicción marítima de los Estados costeros se encuentra regulada, tanto en los convenios o tratados internacionales suscritos, como en la normativa nacional interna, tal es el caso de la Ley de Comercio Marítimo, la cual se atribuye **jurisdicción especial** en diversas

actividades esencialmente marítimas, además de los **supuestos generales** ya establecidos en la Ley de Derecho Internacional Privado.

Por tal motivo, en la esfera del Derecho Marítimo, debe prevalecer la normativa especial (Ley de Comercio Marítimo) sobre la generalidad de la Ley de Derecho Internacional Privado. La inderogabilidad de la jurisdicción establecida en el artículo 10 de Ley de Comercio Marítimo, corresponde a un supuesto “**especial**” en el sistema interno venezolano, distinto a lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Derecho Internacional Privado (como punto adicional, es necesario indicar que no debe haber duda sobre la vigencia del prenombrado artículo frente al artículo 47 de la Ley de Derecho Internacional Privado – *igualmente vigente*–, ya que la Ley de Comercio Marítimo entró en vigor para el año 2001, mientras que la Ley de Derecho Internacional Privado en 1999).

Dicho lo anterior, es claro que, con la disposición del artículo 10, queda excluida por completo la autonomía de la voluntad de las partes, la cual es propia del derecho mercantil. Pero a pesar de esto, la Ley de Comercio Marítimo pareciera tratar de rescatar dicho principio a través de la confusa redacción de su artículo 11, el cual reza lo siguiente:

“Artículo 11. En los casos en los que se admita, una vez producido el hecho generador de la acción, la jurisdicción que corresponda a los tribunales venezolanos, podrá declinarse a favor de tribunales o al procedimiento de arbitraje.” (Resaltados nuestros).

Una interpretación es que la frase “*en los casos en los que se admita*” da cabida a la derogatoria convencional, pudiendo entenderse dicha “*admisión*” como lo acordado por las partes. Sin embargo, la jurisprudencia nacional no ha dado entrada a esta posibilidad, por lo que la doctrina también ha interpretado que dicha “*admisión*” en realidad va referida a los supuestos que “*admita*” la misma Ley de Comercio Marítimo.

Siguiendo esta línea argumentativa, y tomando en consideración la inderogabilidad a favor de los tribunales venezolanos establecida respecto al transporte marítimo, puede concluirse que el artículo 11 no tiene efectos sobre la disposición tipificada en el artículo 10 de la ley, por versar este último sobre una competencia exclusiva y excluyente que no admite el ejercicio de una jurisdicción extranjera.

En caso de requerir información adicional sobre el tema, puede contactarnos a través de nuestros correos electrónicos a las direcciones señaladas al final de este Legal – Tax.

González, Valdez & Asociados - Contadores Públicos, S.C.

Telf.: (+58) 212-310.85.70 / 310.85.71 E-Mail.: mvaldez@gonzalezvaldez.com / rpire@gonzalezvaldez.com / rpacheco@gonzalezvaldez.com / hgonzalez@gonzalezvaldez.com / vmunoz@gonzalezvaldez.com